

**UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA**



**EL CONTRATO A CONDICIONES UNIFORMES EN LOS SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS**

XIMENA KATERINE FANDIÑO SIERRA

ARTÍCULO

JUAN CARLOS VILLALBA CUÉLLAR

**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FACULTAD DE DERECHO
DERECHO DEL CONSUMIDOR
BOGOTÁ D.C.
2013**

EL CONTRATO A CONDICIONES UNIFORMES EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Juan Carlos Villalba Cuéllar¹

Ximena Katherine Fandiño Sierra²

RESUMEN

El contrato de condiciones uniformes, es un contrato regido por disposiciones legales de derecho público y civil; su naturaleza jurídica se sustenta en una serie de elementos que lo caracterizan como instrumento regulatorio en la prestación del servicio público domiciliario de manera uniforme y consensual, para todos los usuarios indeterminados, que se adhieran a él de forma libre y voluntaria. La Ley 142 de 1994, define los aspectos relativos a la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como las circunstancias relacionadas con el corte y la suspensión del servicio. El propósito del presente artículo es elaborar una revisión diáfana y profunda de los conceptos, características, propiedades y naturaleza del contrato de servicios públicos domiciliarios, a fin de establecer el alcance jurídico de este instrumento para la proyección social de las personas.

Palabras claves: Consumo, servicios públicos domiciliarios, empresas prestadoras de servicios públicos, contrato de condiciones uniformes, comisión reguladora, cláusulas abusivas.

¹ Abogado, docente e investigador, miembro de la línea en Derecho Económico y de los Negocios, grupo en Derecho Privado del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. Magíster LLM en Derecho francés, europeo e internacional de negocios de la Universidad Panthéon-Assas Paris II y el Instituto de Derecho Comparado de Paris (Francia). Especialista en docencia universitaria. Correo electrónico: juan.villalba@unimilitar.edu.co

² Asistente de investigación adscrita al Grupo de Derecho Privado del Centro Investigaciones Sociojurídicas y Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG). Este artículo es resultado del proyecto DER 538 «El sistema de protección al consumidor en Colombia», el cual fue financiado por la UMNG. Correo electrónico: ximenafandino@outlook.es.

ABSTRACT

The uniform conditions contract is a contract governed by public law and civil; your juridical nature is based on a number of elements that characterize as regulatory instrument in providing residential public evenly and consensual uniformly for that indeterminate users adhere to it freely and voluntarily. Law 142 of 1994 defines aspects of the execution, performance and termination of the contract and the circumstances connected with the court and the suspension of service, whether as a result of a breach of the obligations assumed by either party or because of objective circumstances as the service failure.

This agreement is of great importance in the development and fulfillment of the purposes of the rule of law, because through him, is regulated, materializes and provides continuous delivery of public services, that including water, sewer, toilet, electricity, distribution fuel gas, fixed and mobile telephony, etc.. In turn, this contract is the guarantee and validity of a regulatory framework for legal protection and defense of the rights of users in consumer.

Keywords: Consumer, Public Utilities, Public Utility Companies, Uniform Contract Conditions, Regulatory Commission Unfair Terms.

INTRODUCCIÓN

El presente es un artículo de investigación que contiene un estudio analítico sobre el Contrato de Condiciones Uniformes como instrumento regulador de las relaciones jurídicas y de consumo que surgen entre la empresa prestadora del servicio público domiciliario y los usuarios receptores del mismo. En este trabajo se profundiza sobre el alcance jurídico, la naturaleza, sus características, y se hace un recorrido por todos los aspectos jurídicos atinentes a su celebración, desarrollo y terminación, asimismo, se revisan los derechos, deberes y obligaciones que surgen a partir de él, con ocasión de la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

El contrato de condiciones uniformes es un contrato típico cuyo objeto contiene, adecua y desarrolla la prestación continua y permanente de las condiciones uniformes de un servicio público domiciliario, bajo criterios de calidad, suministro, disposición, cobertura, prestación eficiente e ininterrumpida, acceso a los usuarios, régimen tarifario proporcional, y otros aspectos estrictamente relacionados con los fines esenciales del Estado, en beneficio de toda la población general.

Todas las empresas que operan la prestación de servicios públicos domiciliarios, aplican esta modalidad contractual para el desarrollo de su objeto social con los usuarios, cuyo control, inspección y vigilancia, se encuentra sujeta a la supervisión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

A partir de este contrato surgen también deberes y obligaciones de cada parte contratante, que varían dependiendo del lado del contrato en el que se encuentren, predominando, desde luego, una mayor responsabilidad de parte de la entidad prestadora por cuanto debe garantizar, en ultimas, la eficiencia del servicio de forma que se pueda sanear y satisfacer las necesidades de las personas que desde su casa, o en sus lugares de trabajo, necesitan y utilizan de forma constante y reiterativa los servicios públicos domiciliarios.

El presente artículo se encuentra distribuido de la siguiente forma: en la primera sección se relaciona el marco legal que estructura y delimita la normatividad del Contrato de Condiciones Uniformes en Colombia, posteriormente se tratará el tema de su naturaleza, las características y los elementos de validez. En la segunda sección, se incluye todo lo atinente a las condiciones uniformes que se aplican en estos contratos, y todo lo referente a su celebración y terminación. Por último, se abordan los temas relacionados con las cláusulas, los sujetos del contrato, y los derechos y deberes de los sujetos involucrados en este tipo de contratos. Finalmente, y a manera de colofón, se hablará de cuales son y que clases de servicios públicos domiciliarios se prestan en Colombia.

1. LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN COLOMBIA

La noción de servicios públicos domiciliarios, proviene del concepto general de servicios públicos, el cual ha sido desarrollado principalmente por corrientes doctrinarias y jurisprudenciales de derecho público y administrativo general y colombiano, que establecen que se trata de un servicio que presta la administración con el propósito de satisfacer necesidades generales. Por su parte, y de manera clara, Libardo Rodríguez (2008, p. 564), plantea que se trata de una actividad pública que tiende a satisfacer necesidades colectivas y no simplemente a uno o varios individuos, lo que sugiere que es una actividad que desarrolla cualquier entidad pública, con naturaleza estatal, con el fin de atender y satisfacer las necesidades que provienen del interés general.

Ahora bien, esa actividad, no está reservada exclusivamente al Estado, o a sus propias entidades, si no que los particulares organizados o las entidades privadas, también pueden colaborar con el desarrollo de los servicios públicos.

En ese sentido, el artículo 365 de la CP, establece que:

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.

De acuerdo con Ayala Caldas (1996, 42-48), los servicios públicos pueden ser: Primarios, que son los que presta directamente el Estado como son la justicia, la defensa exterior y la seguridad nacional; Secundarios, que son los demás servicios que incluso pueden prestar los particulares; Voluntarios, los que pueden usar los particulares de manera libre o voluntaria, a cambio del pago de una tarifa; Obligatorios, aquellos que se deben prestar por imperio del Estado, cobrando una tasa por su prestación; Esenciales, aquellos que deben concretarse principal y prioritariamente a los fines y cometidos del Estado, su interrupción puede poner en peligro la vida, la libertad o la seguridad de la población; Industriales y Comerciales, aquellos destinados incrementar la riqueza, como las explotaciones de minas y yacimientos, entre otros; Públicos Domiciliarios, aquellos que se prestan a los usuarios mediante un sistema de redes físicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o en los sitios de trabajo.

No obstante, Libardo Rodríguez (2008), enmarca los servicios públicos domiciliarios dentro de la categoría de los servicios públicos industriales y comerciales del Estado.

Por su parte, la Corte Constitucional, con sentencia T-578 de 1992, ha establecido la siguiente definición:

Los servicios públicos "domiciliarios" son aquellos que se prestan a través del sistema de redes físicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los usuarios y cumplen la finalidad específica de satisfacer las necesidades esenciales de las personas. El servicio público es el género y el servicio público domiciliario es especie de aquél.

1.1 Las clases de servicios públicos domiciliarios que se prestan en Colombia

De acuerdo con la Ley 142 de 1994, los servicios públicos domiciliarios que se prestan en Colombia, corresponden a los servicios de: “*acueducto*,

*alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural*³.

Si bien es cierto, a partir del numeral 22 del 14 de la Ley 142 de 1994, aparecen relacionadas las definiciones de todos los servicios públicos domiciliarios que se regulan y se prestan en el país, parece conveniente, la claridad con la que explica la Defensoría del Pueblo, acerca de cada servicio de la siguiente forma:

Acueducto. Es el servicio público de conexión, distribución y medición de agua apta para el consumo humano. Son actividades complementarias al servicio de acueducto: la captación, el procesamiento y tratamiento, la conducción y el transporte de agua.

Aseo. Es el servicio de recolección de residuos, principalmente sólidos. Son actividades complementarias al servicio de aseo: el transporte, tratamiento, aprovechamiento y adecuada disposición final de los residuos, el corte del césped y la poda de los árboles ubicados en las vías y áreas públicas, así como la limpieza de estas áreas.

Energía eléctrica. Es el servicio de transporte de energía eléctrica desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario, incluida su conexión y medición. Son actividades complementarias al servicio de energía eléctrica: la generación, transformación, interconexión, transmisión y comercialización de energía.

Gas combustible. Es el servicio de conexión, distribución y medición de gas combustible natural o propano, en cilindros, por camiones o por tubería desde un sitio de acopio hasta la instalación de un consumidor. Son actividades complementarias al servicio de gas combustible: su producción y transporte.

Telefonía. Es el servicio básico de telecomunicaciones que transmite la voz a través de la red telefónica conmutada. Este servicio no incluye la telefonía celular. Son actividades complementarias al servicio de telefonía: la telefonía móvil rural y el servicio de larga distancia, nacional e internacional”.

En relación con este último servicio, hay que considerar que a partir de la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 1687 de 2010 se introdujo modificaciones importantes a los servicios de telecomunicaciones, las cuales podrán seguir siendo prestados por las empresas de servicios públicos respectivas, pero estarán bajo la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio. A su turno, el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009, dispone que:

³ Artículo 1º de la Ley 142 de 1994. Sin embargo vale la pena recordar que con la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009, los servicios de Telefonía pública básica conmutada y sus derivados pasan a ser competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio.

A las telecomunicaciones, y a las empresas que prestan los servicios de telefonía pública básica conmutada, telefonía local móvil en el sector rural y larga distancia no les será aplicable la Ley 142 de 1994 respecto de estos servicios, salvo en el caso de estas empresas, lo establecido en los artículo 4° sobre carácter esencial, 17 sobre naturaleza jurídica de las empresas, 24 sobre el régimen tributario, y el Título Tercero, (...). En todo caso, se respetará la naturaleza jurídica de las empresas prestatarias de los servicios de telefonía pública básica conmutada y telefonía local móvil en el sector rural, como empresas de servicio público.

1.2 Régimen Legal

El marco regulatorio del Contrato de Condiciones Uniformes (CCU), encuentra su fundamento jurídico mas importante en la Constitución Política de Colombia (CP); en las leyes relativas a la materia, tanto de orden público, civil como comercial; en los decretos, resoluciones y actos administrativos emitidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), las comisiones de regulación de cada sector y en las condiciones uniformes que para el efecto fijan las empresas prestadoras del servicio a través del mismo contrato.

En primer lugar, comenzamos por las normas constitucionales, e iniciamos con el artículo 365 de la CP que nos habla de los servicios públicos y nos dice que estos son inherentes a la finalidad del Estado, y que el Estado tiene la obligación de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

En este artículo, también se menciona que el régimen jurídico de los servicios públicos está sometido a la ley, y se facultan a los particulares, las comunidades organizadas y al Estado mismo para su prestación efectiva. De igual forma, encontramos los artículos 366 y 367, que hacen relación al mejoramiento de la calidad de la población mediante la solución de necesidades básicas insatisfechas, con prioridad en el manejo presupuestal de la nación, asimismo, las competencias en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, en relación con la administración, la cobertura, la calidad, la financiación y el régimen tarifario.

Entre tanto, el artículo 368 hace referencia al reconocimiento y apoyo de personas de escasos recursos para el pago de las tarifas de los servicios públicos, donde indica, en sujeción al principio de solidaridad, que las entidades territoriales, sean municipios, departamentos y distritos, estarán habilitados para conceder subsidios con el propósito de atender estas personas.

Por su parte, los artículos 369 y 370, nos hablan de los derechos y deberes de los usuarios y de las formas de participación en la gestión de las empresas que prestan los servicios, culminando con la competencia que ostenta el presidente para señalar las políticas generales frente al control y la administración y vigilancia efectiva de los servicios públicos domiciliarios a través de la Superintendencia respectiva.

En segundo lugar, la ley, todas aquellas estipulaciones aplicables a la materia contenidas en los Códigos Civil y de Comercio, pero de manera particular, las normas contenidas en la Ley 142 de 1994 *“por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”*.

En dicha Ley, podemos observar toda la regulación pertinente al contrato de servicios públicos domiciliarios a partir del Título VIII, Capítulo I, artículos 128, 129, 130, 131, 132, hasta el 133, y en lo relativo a la prestación del servicio desde el artículo 134 en adelante.

En tercer lugar, las resoluciones y conceptos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), en este caso, corresponden a decisiones vinculantes que emite la entidad en ejercicio de su atribuciones relacionadas con el control y la vigilancia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con las facultades otorgadas por los artículos 17, 19, 75, 79, 81 y subsiguientes de la Ley 142 de 1994, también en los artículos 9, 21, 22 y relacionas en la Ley 143 de 1994, *“por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética”*; asimismo, en los artículos 7º, 10º, 12, 13, 14, 15, 20 y subsiguientes de la Ley 689 de 2001 *“por el cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994”*, y de forma integral, el Decreto 990 de 2002 *“por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”*.

Por último, se incluyen las resoluciones, conceptos, consultas, normas y actos administrativos de carácter técnico emitidos por las comisiones reguladoras, de cada sector, en ese caso, respecto de las emitidas por las siguientes entidades: la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)⁴; la Comisión de Regulación

⁴ La Comisión de regulación de Energía y Gas es una entidad técnica y tiene el objetivo de generar y regular las condiciones necesarias para que los servicios de energía eléctrica, gas natural y gas licuado de petróleo (GLP) se presten al mayor número posible de personas, con

de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRAP)⁵; y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)⁶.

Finalmente, de acuerdo con Cesar Cárdenas (2003, p. 146), existe una jerarquía normativa que opera dentro del régimen legal aplicable al CCU, a la que se someten las partes cuando existe una controversia o un conflicto jurídico en la interpretación, dicho orden es establecido por el doctrinante de la siguiente manera:

El derecho público aplicable.

La Ley 142 de 1994.

Las condiciones especiales que se pacten con los usuarios.

Las condiciones uniformes que señalen las entidades proveedoras de servicios públicos domiciliarios.

Las normas del Código Civil⁷ y del Código de Comercio⁸.

No sobra decir que, la jurisprudencia también ocupa un lugar privilegiado en esta jerarquía, no solo como criterio auxiliar en la interpretación normativa, si no como verdadera fuente de derecho en la práctica jurídica de esta importante materia.

el menor costo posible para los usuarios y con una remuneración adecuada para las empresas que permita garantizar calidad, cobertura y expansión.

⁵ De acuerdo con el artículo 68, 69 y 70 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico es la entidad creada para regular los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en Colombia, entre sus funciones principales está la de expedir metodologías tarifarias aplicables a las empresas prestadoras de los servicios públicos respectivos.

⁶ La Comisión de regulación de comunicaciones es una entidad vinculada con el ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, y tiene la función de promover la competencia y la inversión así como proteger los derechos de los usuarios y acorde con los lineamientos del estado, garantizar la prestación efectiva de los servicios de telecomunicaciones y el desarrollo del sector en el marco de la convergencia y la sociedad de la información.

⁷ En general, todo lo relativo a los contratos, en su parte constitutiva, definiciones, elementos de validez, de la eficacia, las partes, requisitos y demás se rigen por las disposiciones del Código Civil, particularmente, a partir de los artículos 1495, 1602 y

⁸ Algunas normas del Decreto 410 de 1971 o Código de Comercio, son aplicadas en los Contratos de Condiciones Uniformes, sobre todo en lo relativo a las reglas de la cesión del contrato, conforme se establece en los artículos 888 y 895 del mismo.

2. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

El CCU, también llamado de servicios públicos, es un contrato uniforme y consensual, el cual es elaborado por empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, bajo una forma que contiene una serie de estipulaciones y elementos que regulan y estructuran las condiciones previas en las que se va a suministrar el servicio de manera permanente a todos los usuarios.

De conformidad con el artículo 128 de la Ley 142 de 1994, el CCU es un contrato establecido únicamente por la empresa prestadora para ser aplicado de manera uniforme a todos aquellos usuarios, que determinados o indeterminados, se adhieran a él, sin perjuicio de las disposiciones especiales que se lleguen a pactar en beneficio con otros usuarios.

El CCU, es un contrato oneroso, que exige un pago en dinero, y del cual surge una relación jurídica de obligaciones y derechos entre la empresa prestadora y el usuario o suscriptor.

Este contrato también tiene algunas particularidades en relación con otros, y es que padece de un tratamiento jurídico mixto, pues es regulado tanto por normas de derecho público, como por normas de derecho privado, lo que supone una interdisciplinariedad en su estudio, y desde luego, un debate sobre su naturaleza jurídica.

En efecto, a comienzos de la década de los noventa, la Corte Constitucional, mediante sentencia T-540 de 1992 coincidió con el debate librado por la doctrina, frente al estatus jurídico que ostenta este contrato, y sostuvo que:

(...) la tesis privatista, anteriormente vinculada a la distinción de actos de autoridad y actos de gestión de la administración, hoy en auge en razón del movimiento que favorece la privatización de empresas de servicios públicos, postula la aplicación del derecho privado a muchas prestaciones administrativas, en especial las desempeñadas por concesionarios. La tesis de la naturaleza jurídico-pública, de otra parte, sostenida por la doctrina alemana, señala que invariablemente la actividad inherente a todos los servicios públicos no es contractual, sino reglamentaria. Se busca enfatizar la prevalencia de la seguridad jurídica sobre las ventajas individuales de la contratación privada en atención a que la prestación de servicios es una actividad dirigida a la realización del interés público.

No obstante, la posición de la Corte se hace más conciliadora, con el tiempo, y augura la existencia de un contrato especial, con predominancia en el tratamiento público, conforme a la relación jurídica que se desprende de él, en efecto, la sentencia C-293 de 1996, afirma que:

(...), dicha relación jurídica no sólo se gobierna por las estipulaciones contractuales y el derecho privado, sino por el derecho público, contenido en las normas de la Constitución y de la ley que establecen el régimen o estatuto jurídico de los servicios públicos domiciliarios, las cuales son de orden público y de imperativo cumplimiento, porque están destinadas a asegurar la calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios, el ejercicio, la efectividad y la protección de los derechos de los usuarios, y a impedir que las empresas de servicios públicos abusen de su posición dominante.

A partir de allí, se aclara el panorama sobre su naturaleza jurídica y se identifica el tratamiento legal que se le debe dar a todas las controversias que surjan frente a la interpretación y aplicación del CCU, algo que contribuye con la seguridad jurídica frente a la recta aplicación de sus disposiciones contractuales, pues en lo relativo a su constitución y consensualidad, se establece que es de conocimiento de la justicia ordinaria, mientras que en lo referente a la aplicación de cláusulas y decisiones administrativas relacionadas con la suspensión, terminación y corte del servicio, es de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos⁹ (entidad encargada de vigilar y controlar a las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios), a través de sus conceptos unificadores, ha fijado algunos criterios en torno al tema de los Servicios Públicos Domiciliarios¹⁰, y de manera particular, frente al CCU.

⁹ De acuerdo con el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es la entidad encargada de vigilar y controlar a las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y aquellas que, en general, realicen actividades que las haga sujeto de aplicación de la presente Ley, toda vez que con sus decisiones afecten en forma directa o indirecta a usuarios y/o suscriptores del servicio. La Superintendencia tiene facultades sancionatorias y hace las veces de autoridad administrativa superior en la resolución de los recursos de apelación.

¹⁰ De conformidad con el artículo 1º de la Ley 142 de 1994, los Servicios Públicos Domiciliarios son aquellos servicios prestados de manera continua a los usuarios de las personas o sociedades constituidas de conformidad con el artículo 15 de la presente Ley. Estos servicios corresponden a los de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; y demás actividades complementarias y servicios especiales definidos en la Ley.

Uno de los más revisados es el Concepto SSPD-OJU-2010-12, que al respecto menciona lo siguiente:

(...) con el fin de regular las relaciones jurídicas (derechos, deberes y obligaciones) entre las personas que ofrecen estos servicios y sus usuarios, la Ley 142 de 1994 configuró un tipo de contrato denominado de servicios públicos, también llamado de condiciones uniformes, cuyas estipulaciones se encuentran previamente definidas por el prestador del servicio.

Este concepto contempla un análisis muy completo del régimen legal del CCU, y empieza por referir el artículo 132 de la Ley 142 de 1994, que al respecto dice que el CCU se rige, además de las disposiciones contractuales, por las condiciones especiales que se pacten con los usuarios y por aquellas que de manera uniforme establezcan las empresas de servicios públicos domiciliarios, de igual manera, por las normas del Código de Comercio y del Código Civil.

Asimismo, el concepto sostiene, en uno de sus apartes, que la jurisprudencia ha sido reiterativa en decir que la relación jurídica entre la empresa y el usuario es una relación de orden legal y reglamentaria, estrictamente objetiva, que se consolida en la prestación de un servicio, pues, aclara que el CCU es: *“un contrato intervenido por el Estado en todo lo relativo a los derechos y deberes de los usuarios, su régimen de protección y su forma de participación en la gestión y fiscalización de las empresas prestadoras”*.

3. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES

Como se ha podido observar, el CCU, es un contrato que posee varias características¹¹, que de acuerdo con Tamayo Lombana (2004, p. 82), se pueden clasificar de la siguiente manera: según sus condiciones de forma, se trata de un contrato consensual; según las condiciones de fondo, es un contrato de adhesión; según los derechos que origina, se trataría de un contrato oneroso y bilateral, posiblemente conmutativo; según la interpretación, nominado e innominado; y según la clasificación general, puede ser principal, accesorio, civil, comercial y administrativo. Vale decir, que también estamos al frente de un contrato, sujeto a condiciones previas para su realización, reglamentado por disposiciones de derecho público y privado.

¹¹ Para mayor claridad a partir del libro cuarto, título I, artículo 1494 del CC, se encuentra toda la clasificación general de las obligaciones.

Con todo, la clasificación anterior se presenta de la siguiente manera, sin desconocer que seguramente existen otras formas características por mencionar, hablaremos de las más importantes, entre ellas las siguientes:

Uniforme y consensual

Es un contrato Uniforme, pues otorga la posibilidad de un tratamiento igualitario a todos los usuarios a los que se les ofrece el servicio bajo las mismas condiciones, sin perjuicio de otras estipulaciones especiales que por orden legal o por disposición de autoridad competente, se deban mantener para algunos usuarios. Asimismo, es consensual pues se perfecciona con el mero consentimiento libre y voluntario de las partes, en oposición al solemne. En efecto, el artículo 129 de la Ley 142 de 1994, dice que existe contrato, desde el momento en que concurren dos circunstancias, a saber, la determinación de las condiciones uniformes por parte de la empresa y el requerimiento del usuario para recibir, desde el inmueble en el que habita, el servicio.

De libre discusión o de adhesión.

En términos simples, se trata de un contrato que es redactado por una sola de las partes, al cual se adhieren otra u otras, interesadas en suscribir las condiciones definidas en ese contrato; claramente, las condiciones son definidas por la parte fuerte o dominante en el contrato. Cesar Cárdenas (2004), por su parte, asegura que en relación con esta característica de las obligaciones, se ha traído esta clasificación de la doctrina, (pues no aparece en el CC, como tal), dado que tampoco tiene origen legal, pero configura, limita y restringe la libertad para discutir las cláusulas contractuales.

Oneroso y Bilateral

En efecto, es un contrato bilateral porque surge de la ratificación simultánea de las obligaciones a cargo de las partes contratantes, quienes se obligan al tenor de lo dispuesto en el contrato, pero también es oneroso, por cuanto el pago del servicio se debe hacer a través de una suma de dinero líquida, no equiparable en especie.

En esos términos, la Corte Constitucional, mediante Sentencia SU-1010 de 2008, ha dicho que:

Los servicios públicos domiciliarios se rigen por el principio de onerosidad, lo que implica que los usuarios deben pagar por el servicio prestado, cumpliendo así el deber constitucional de contribuir con el financiamiento de los gastos e inversiones del Estado y con la satisfacción de sus propias necesidades. En este orden de ideas, no existe justificación alguna para que se promueva una cultura de no pago entre los usuarios, situación que,

a la postre, terminaría por afectar la posibilidad de que ellos mismos continúen siendo beneficiarios de los servicios prestados.

Típico o nominado

Con toda seguridad se trata de un contrato típico, pues está regulado y estructurado de manera clara y específica en la Ley 142 de 1994, junto con sus decretos, normas y preceptos reglamentarios, asimismo, como se ha podido observar desde la misma Constitución.

Principal

Tal y como lo plantea Fernando Durango (2005, p. 113), cuando afirma que este contrato no necesita de otro para predicar su existencia, pues es autónomo e independiente; a su vez, dice que no es relevante, ni incide el hecho de que el inmueble sobre el que se presta el servicio se encuentre en arriendo, o tenga algún gravamen hipotecario. Igualmente, hay que agregar que tampoco importa si la calidad del usuario o suscriptor frente al inmueble en el que habita, ya que puede tratarse de un poseedor, usufructuario, arrendatario, propietario, etc.

Respecto a los elementos constitutivos, hacemos referencia a los elementos de la validez del acto jurídico mediante el cual surte efectos jurídicos el contrato, toda vez que existen elementos que determinan la eficacia del contrato como acto jurídico y elementos que establecen la validez de los mismos. Los primeros hacen referencia, de acuerdo con De Cifuentes Castro (2009, p. 533), a la voluntad exteriorizada, el objeto jurídico y a la solemnidad para los actos que lo requieran; mientras que los segundos hacen referencia a la capacidad, el consentimiento, el objeto lícito y la causa lícita.

Estos elementos se definen como presupuestos de validez que permiten determinar la vocación jurídica de toda relación contractual que de acuerdo con Tamayo Lombana (2004), se origine entre sujetos capaces de manifestar su voluntad de forma libre y espontánea (consentimiento); con aptitud legal para ser titulares de derechos y obligaciones (Capacidad); una operación jurídica o prestación que las partes escogen desarrollar como negocio jurídico (Objeto); y una razón u origen legal del fenómeno jurídico del contrato (Causa).

4. LAS CONDICIONES UNIFORMES EN EL CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Las condiciones uniformes, son disposiciones contractuales que como su nombre lo indica se aplican de manera uniforme a todos los usuarios que se adhieran al contrato. Esto implica que conforme a estas disposiciones queda condensada la relación de consumo entre el usuario o suscriptor y la empresa de servicios públicos. Algunas de estas condiciones comprenden regulaciones propias que vienen definidas por las respectivas comisiones de regulación, quienes tienen la facultad de regular las condiciones de mercado, de competencia y los monopolios en la prestación de los servicios a cargo de las empresas correspondientes.

En efecto, la Resolución 376 de 2006 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRAP) establece un modelo de contrato aplicable para todas las empresas que presten el servicio básico de Aseo, el cual deberá contener, como mínimo, las siguientes disposiciones distribuidas en siete capítulos: en una primera parte, relativa a Disposiciones Generales se establece un objeto, que contiene el cómo y dónde (en qué zonas) se podrá prestar el servicio, asimismo, bajo qué condiciones técnicas; una cláusula de definiciones, que debe contener todo lo relativo a los términos que se emplean para un lenguaje claro y preciso en la prestación de este servicio; unas cláusulas que determinan las partes, la solidaridad, y el régimen legal del contrato; una cláusula de vigencia del contrato, la cual si es por tiempo fijo, no podrá exceder de 2 años, y a termino indefinido, estando sujeto a la terminación por disposición legal de las partes; también se establecen cláusulas relativas a las condiciones del suscriptor, y sobre la perfección del servicio y la publicidad.

En el capítulo siguiente (II), se habla de las Obligaciones y Derechos de las Partes, que como su nombre lo indica consagra de forma pormenorizada todas las funciones, deberes y obligaciones de la persona prestadora y del suscriptor, de igual manera incluye todo lo atinente a los derechos de las partes.

En los capítulos (III y IV), se habla de todo lo referente a la Facturación, y de las Obligaciones Accesorias y de la Falla en la Prestación del Servicio las cuales desarrollan en sus respectivas cláusulas, disposiciones que contienen todo lo relativo al periodo de facturación, el sitio de entrega de la factura, el costo, entre otras; asimismo, el capítulo IV habla del interés de mora, el reporte a las centrales de riesgo, garantías exigibles y el tema de la falla del servicio.

Por último, los capítulos (V, VI y VII), hablan de los recursos de Peticiones, Quejas, Reclamaciones y Recursos; Modificaciones y Terminación del Contrato; y Disposiciones Finales.

En todos los modelos de CCU, la estructura es la misma, claro está, que algunas disposiciones, términos y condiciones varían de acuerdo a las necesidades del servicio, las disposiciones y reglamentación que determinen para cada sector las comisiones de regulación, y desde luego, con sujeción a los preceptos normativos y constitucionales que para el efecto se encuentren prevenidos en el régimen jurídico sobre la materia.

4.1 Análisis de los Contratos de prestación de servicios públicos

El siguiente cuadro contiene una comparación sumaria de los contenidos de los contratos de servicios públicos, sus características, similitudes y diferencias conforme a la normatividad establecida por las comisiones reguladoras de los respectivos sectores a que pertenecen, y el referente legal sobre su procedencia, en la cual se revisarán los formatos adoptados por algunas empresas que se tomaran de ejemplo para una mayor ilustración.

CUADRO NÚM. 1. COMPARATIVO DE LOS CONTRATOS UTILIZADOS POR LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS EN SUS RELACIONES DE CONSUMO PARA CON LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES

Clase de Servicio	Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico	Servicios de Energía y Gas	Servicios de Comunicaciones
Entidad reguladora	Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico	Comisión de Regulación de Energía y Gas	Comisión de Regulación de Comunicaciones
Normatividad Reguladora	(Resolución 376 de 2011 y la Ley 142 de 1994)	(Resoluciones 108 de 1997, 122 de 2011 y	(Resolución 3066 de 2011 y ley 1341 de 2009 ¹²)

¹² COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Diario Oficial 47.426. Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones. 30 de julio de 2009. Ley 1341 de 2009.

		Ley 142 de 1994)	
Empresa Prestadora	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E. S. P.	VATIA S.A. E.S.P. y ELECTRICARIBE	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. Y EMCALI
Contrato	Contrato de Condiciones Uniformes	Contrato de Condiciones Uniformes	Contrato de Prestación de Servicios de Comunicaciones
Características	<p>Establece un acápite que habla de indemnización a la empresa cuando el usuario hace uso irregular el servicio por causales taxativas en el contrato.</p> <p>Cuando hay un incumplimiento del pago por parte de los usuarios y/o suscriptores del servicio, por dos periodos consecutivos de facturación, sin que la empresa haya procedido a la suspensión, se reserva la posibilidad de adelantar las acciones de cobro respectivo únicamente contra el beneficiario real del servicio, autorizando la extinción de la solidaridad.</p>	<p>Existen dos tipos de usuarios, los regulados y los no regulados, estos primeros tienen grandes requerimientos del servicio y están sometidos a otras condiciones especiales, sujetas a las disposiciones de la CREG.</p>	<p>Se reserva la facultad de imponer sanciones cuando la suspensión del servicio es imputable al suscriptor o cuando no se paguen bienes y servicios oportunamente.</p> <p>Controlado, vigilado e inspeccionado por la Superintendencia de Industria y Comercio.</p> <p>Se pueden pactar las condiciones por sistema de Call center. Las condiciones del contrato pueden variar de un usuario a otro, de forma libre, pero expresa.</p> <p>Requiere de garantías para la protección personal de su intimidad.</p>

Objeto	Regular las condiciones para la prestación de los servicios de acueducto y/o de alcantarillado, a cambio de un precio o tarifa determinada.	Definir las condiciones uniformes para la prestación del servicio público de energía eléctrica, en lo que respecta a su distribución, comercialización y suministro.	La prestación del servicio básico de telecomunicaciones , en cuyos objetos esta la transmisión conmutada de voz; el Servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada ¹³ , local, local extendida, de larga distancia, de larga distancia internacional, y telefonía móvil rural. En general todos los servicios de comunicaciones.
Vigencia del Contrato	Se entiende celebrado por término indefinido.	Termino indefinido.	Clausula de permanencia mínima, no inferior a un (1) año, previa autorización con el suscriptor.
Naturaleza del Contrato y Régimen Jurídico	Es un contrato de los denominados por la ley " <i>de adhesión</i> " y hacen parte de él no sólo sus estipulaciones escritas, sino todas las que la empresa aplica de manera uniforme en la prestación de los servicios de acueducto	Es un contrato de naturaleza uniforme consensual, de tracto sucesivo, oneroso y de adhesión, su interpretación y armonización atienden la	Es un contrato de libre condición que pactan las empresas, aunque no de manera uniforme para los usuarios, y está compuesto por disposiciones escritas que en él

¹³ COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES. Consultado el 07 de julio de 2013. Extraído de: <http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?s=2>. De acuerdo con los proveedores de redes de servicios en Colombia, entre el primer trimestre del 2010 y el primer trimestre de 2013, han disminuido en un millón, aproximadamente, el número de líneas de telefonía pública básica conmutada en todo el país, situación que contrasta con el aumento del uso y acceso del servicio de telefonía móvil celular, la cual asciende a cuarenta y seis millones de usuarios abonados.

	y alcantarillado, la Ley 142 de 1994 y de manera concordante con ésta. Los reglamentos y resoluciones, que también modifiquen, deroguen o adiciones esta normatividad.	jerarquía normativa en materia de servicios públicos domiciliarios, la regulación, las normas de los códigos de Comercio y Civil. Las condiciones especiales o particulares prevalecerán sobre las condiciones uniformes del presente contrato.	han sido desarrolladas mediante leyes que regulan la prestación de servicios de comunicaciones, en especial la Ley 1341 de 2009, y la Resolución CRC No. 3066 de 2011, así como en las normas que las reglamenten, adicionen o modifiquen de conformidad con la CRC y el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Partes en el Contrato	Por un lado la empresa prestadora y por el otro el Suscriptor y todo aquel que lo suceda en sus derechos reales sobre el inmueble determinado.	La empresa prestadora por un lado y todos los usuarios regulados y no regulados, actuales o potenciales que se adhieran al CCU, los cuales pueden ser receptores del bien sea que el mismo se halle habitado por su propietario, usufructuario, poseedor, tenedor o arrendatario.	Empresa prestadora y usuario que también puede ser una persona natural o jurídica quien recibe los servicios de comunicaciones.
Obligaciones de la empresa	Suministrar de forma continua y permanente el servicio con calidad,	Prestar el servicio continuo y con la calidad	Prestar los servicios en forma continua y eficiente,

	<p>asimismo recibir y transportar a través de las redes autorizadas, los residuos líquidos aguas servidas y lluvias. Otorgar garantía para los equipos de medición. Realizar la medición respectiva del consumo.</p>	<p>establecida en la normatividad que regule la materia. Asimismo Evitar privilegios y discriminaciones injustificadas y toda práctica que genere competencia desleal o restrinja en forma indebida la competencia respecto de otras Empresas que presten servicios públicos. Como todo contrato afín, la empresa debe medir el consumo, con los medios respectivos. Entre otros.</p>	<p>cumpliendo con las normas de calidad establecidas en Vigilancia por Superintendencia de Industria Y Comercio. Realizar todos los correctivos del servicio cuando sean necesarios.</p>
<p>Solución de Controversias</p>	<p>Cualquiera de los mecanismos alternativos de solución de controversias aplicables para las diferencias que surjan entre la empresa y cualquiera de las otras personas que sean partes en el contrato, con ocasión de la celebración, ejecución, terminación o liquidación del contrato, y que no hayan podido</p>	<p>No incluye cláusula para la solución de controversias.</p>	<p>No cuenta con cláusula para la solución de controversias, que se presenten durante la relación contractual entre la empresa y el usuario.</p>

	<p>resolverse aplicando las normas que éste contiene sobre recursos. El arbitramento se llevara a cabo en el</p> <p>Municipio en el que deben prestarse los servicios y el proceso no deberá durar más de seis meses. Las partes pueden solicitar a la SSPD la designación de personas que puedan colaborar en la solución de controversias que puedan incidir en su prestación oportuna, cobertura o calidad.</p>		
--	--	--	--

Fuente: VATIA S.A. E.S.P. CCU. Consultado el 05 de julio de 2013. Extraído de la página: http://www.vatia.com.co/galeria_de_archivos/; ELECTRICARIBE. Contrato de prestación del servicio público de distribución Y/o comercialización de energía eléctrica. Consultado el 05 de julio de 2013. Extraído de la página: http://www.electricaribe.com/servlet/ficheros/1297134192474/Contrato_condiciones_uniformes,2.pdf; EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEBOGOTA E. S. P. Consultado 06 de julio de 2013. Extraído de: <http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal>; EMCALI. Contrato de prestación de servicios de comunicaciones. Consultado 06 de julio de 2013. Extraído de: http://www.emcali.com.co/c/document_library/get_file?uuid=519fa752-0659-4b33-ba2d-efc6a38cc7c5&groupId=11737.

Tal como se puede observar en el anterior cuadro lo que se quiso establecer fueron las grandes diferencias entre tres tipos de contratos, uno de servicio de agua y alcantarillado, otro de energía y otro de comunicaciones.

Puedo establecer que entre estos tres diferentes modelos de contratos y conforme al marco constitucional como principal norma de este tipo de contratos en aras de establecer como función social del mismo, como objetivo principal, el contrato de agua y alcantarillado es el que se asemeja en gran proporcionalidad frente a sus fines, alcances, mecanismos de solución de conflictos y demás

situaciones que se pueden derivar de la prestación de un servicio, tales como derechos y obligaciones entre las partes, la forma en la que se desarrolla este contrato es en gran medida por no decir en su totalidad con intervencionismo del Estado.

Esto quiere decir que el Estado es quien se encarga por velar que se cumpla esta prestación a todo el territorio nacional de manera prioritaria y que en caso de no cumplirse por determinada razón, se puede hacer uso de diferentes medios para salvaguardar este derecho al agua, como lo es por medio de vía Tutela, Derecho de Petición, entre otros medios de solución de controversias en donde más que entrar a analizar o debatir una falta en las obligaciones de pago, se pondera el derecho al mínimo vital de las personas en relación al uso del agua.

Tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional en sentencia C-220/11, Magistrado Ponente Dr. Pretelt Chaljub:

Como derecho fundamental, el derecho al agua tiene tanto un alcance subjetivo como objetivo. Como derecho subjetivo, la tutela del derecho al agua puede ser reclamada ante las instancias judiciales en escenarios de vulneración tanto por parte del Estado como por parte de particulares, especialmente cuando se trata de agua para consumo humano. El reconocimiento de su naturaleza subjetiva ha dado lugar, por ejemplo, al desarrollo de una línea jurisprudencia amplia de protección por medio de la acción de tutela.

De lo anterior se resaltar entonces, que la prestación del servicio de agua en Colombia cumple un papel importante en relación con el desarrollo Constitucional y jurisprudencial, es decir, el gran intervencionismo del Estado por no decir que es absoluto en esta prestación, se debe a que cumple con los fines sociales del Estado, es una prestación que se debe de garantizar a todos los ciudadanos del territorio nacional, independiente de si se ha incumplido o no el contrato de prestación de servicio de agua, alcantarillado y aseo, pues lo que se entra a debatir es la afectación al mínimo vital de las personas, pasa de ser más que un incumplimiento civil o comercial a ser una garantía Constitucional y por ende amparada por diferentes medios, como es por vía de tutela, derecho de petición, acciones de grupo y otros.

5. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES

El CCU nace a la vida jurídica, cuando el usuario solicita el servicio y la empresa define las condiciones uniformes del contrato, la prestación del mismo tendrá lugar luego de que el inmueble a donde va a ser suministrado, cumpla con

las condiciones técnicas requeridas por la empresa. A su tenor, el artículo 129, dispone que:

Existe contrato de servicios públicos desde que la empresa define las condiciones uniformes en las que está dispuesta a prestar el servicio y el propietario, o quien utiliza un inmueble determinado, solicita recibir allí el servicio, si el solicitante y el inmueble se encuentran en las condiciones previstas por la empresa.

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, son partes en el contrato, la empresa de servicios públicos, y los usuarios. Una vez celebrado el contrato, surge una relación jurídica entre las partes, orientada por un objeto, que se distingue de la prestación del servicio, por cuanto recae en el pago de una suma adeudada por el suscriptor, cuya forma de pago será acordada por la empresa, tal y como se plantea, en el concepto SSPD-OAJ-2010-669.

Al respecto, el artículo 1602 del Código Civil (CC), establece que:

Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. En ese sentido, el artículo 1494 del CC, también dispone que: “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones.

Sin embargo, hay que señalar, que la autonomía de la voluntad contractual en el CCU es relativa, pues de acuerdo con la Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, las condiciones uniformes:

(...) no quedan a la libre definición por parte del operador, pues como bien señaló la Corte Constitucional en la *ratio decidendi* de la providencia de constitucionalidad que estudió los citados artículos 128 y 129 de la Ley 142, el Estado (legislador y regulador económico) suple en buena parte la voluntad de las partes (empresa-usuario) en orden a restablecer el equilibrio contractual que podría verse amenazado por la posición dominante del prestador.

Finalmente, es importante considerar que en cuanto al equilibrio o reciprocidad de las partes en el contrato, la Sentencia C1-1162 de 2000 de la Corte Constitucional, considera que:

(...) los referidos contratos por adhesión, aunque deben ser objeto de la intervención estatal para introducir en ellos el equilibrio toda vez que se celebran entre una parte fuerte y una débil (ver, por ejemplo, las sentencias

C-955 y C-1140 de 2000, proferidas por esta Corte en lo relativo a vivienda), así como los establecidos para la prestación de los servicios públicos, no violan, per se, el principio de igualdad. En este tipo de convenios una de las partes no está en condiciones de discutir las cláusulas contractuales, ya por la posición dominante en que se encuentra la otra, o porque, como ocurre con los servicios públicos domiciliarios, los convenios particularizados con cada uno de los usuarios podrían comprometer gravemente la eficiencia y continuidad de la prestación y, por ende, el interés general.

5.1 Terminación del Contrato de Condiciones Uniformes

La terminación del contrato supone la concurrencia de cierto tipo de circunstancias y la aplicación de una serie de disposiciones relativas al incumplimiento, terminación y corte del servicio. En efecto, el artículo 141 de la Ley 142 de 1994, nos habla del incumplimiento reiterado del contrato por espacio de varios meses, de manera que cuando genera afectación grave a la empresa o a terceros, la empresa tiene la facultad de aplicar la resolución del contrato, lo que implica el corte o la suspensión del servicio; también, nos dice que el atraso en el pago cuando corresponde a tres facturas de servicios y la reincidencia en una causal puede conllevar la suspensión a un término no inferior a dos años, o al corte definitivo del servicio.

Por su parte, el inciso 3º del artículo 141 de la Ley 142 de 1994, nos aclara que:

La entidad prestadora podrá proceder igualmente al corte en el caso de acometidas fraudulentas. Adicionalmente, y tratándose del servicio de energía eléctrica, se entenderá que para efectos penales, la energía eléctrica es un bien mueble; en consecuencia, la obtención del servicio mediante acometida fraudulenta constituirá para todos los efectos, un hurto.

Asimismo, existe una situación particular en la cual la empresa puede dar por terminado el contrato de servicios públicos, y es cuando el inmueble sobre el cual se presta el servicio es demolido, lo que naturalmente genera la terminación inmediata del contrato.

De otra parte, hay que tener en cuenta que una vez celebrado el contrato, no puede darse por terminado, de manera espontánea, pues la ley permite que las empresas prestadoras apliquen cláusulas de permanencia que no sean superiores a dos años, pues de lo contrario sería un abuso de la posición dominante. En

efecto es considerada dentro de las cláusulas abusivas, asimismo de acuerdo con los numerales 17 y 19 del artículo 133 de 1994:

Las que obligan al suscriptor o usuario a continuar con el contrato por más de dos años, o por un plazo superior al que autoricen las comisiones por vía general para los contratos con grandes suscriptores o usuarios; pero se permiten los contratos por término indefinido.

Las que limitan el derecho del suscriptor o usuario a pedir la resolución del contrato, o perjuicios, en caso de incumplimiento total o parcial de la empresa.

Situación similar enfrentó la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios en el año 2004, aunque no precisamente con una cláusula abusiva por permanencia extendida, si no por supuesta falta eficiente en el suministro del servicio. Efectivamente, la usuaria había solicitado a la empresa la terminación del CCU por inconformidad en el servicio, pues argumentaba que no recibía satisfactoriamente la recolección de basuras en el sector donde habitaba. La empresa por su parte, se negó a la terminación del contrato, aduciendo que si cumplía con la prestación continua y eficiente del servicio y que no había causal para que el contrato se pudiera terminar antes de (2) dos años.

La Superintendencia en el presente caso resolvió el recurso de apelación y se pronunció mediante Resolución SSPD- 4073 de 2004, dándole la razón a la usuaria, afirmó que dentro de los derechos de los usuarios está el de la libre elección del prestador del servicio y el de la prestación del servicio en condiciones de efectividad, calidad y continuidad, pues de lo contrario el usuario insatisfecho estará facultado para pedir la terminación del contrato en cualquier tiempo, incluso antes de los (2) dos años, pues versa un incumplimiento de parte de la empresa de sus obligaciones contractuales.

A esto también se le denomina, falla en la prestación del servicio, pues de acuerdo con el artículo 136 de la Ley 142 de 1994:

(...) la prestación continua de un servicio de buena calidad, es la obligación principal de la empresa en el contrato de servicios públicos.

El incumplimiento de la empresa en la prestación continua del servicio se denomina, para los efectos de esta Ley, falla en la prestación del servicio.

Ahora bien, existen algunas causales comunes, válidas y aplicables para la terminación del CCU, entre están: las que se refieren a la decisión mutua de las partes; las que versan sobre; falla en el servicio por parte de la empresa; las que

tratan del incumplimiento del contrato por meses reiterados de parte del suscriptor; cuando exista demolición del inmueble donde se presta el servicio; también ocurre por falta de medición en el consumo, en el evento en que haya una intervención maliciosa del usuario; bajo circunstancias de incumplimiento cuando afecten gravemente a la empresa o a terceros; asimismo, con el atraso reiterado en el pago con facturas de tres periodos o más, finalmente en los eventos de acometidas fraudulentas por parte de usuarios que hacen instalaciones o conexiones ilegales.

6. SUJETOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS, USUARIOS, ARRENDATARIOS, PROPIETARIOS Y PERSONAS PRESTADORAS

Los sujetos en el CCU, son las mismas partes, y como ya se indicó, son el usuario y/o suscriptor y la empresa prestadora del servicio, conforme lo establece el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Por su parte, los numerales 31 y 33 del artículo 14, nos trae las siguientes definiciones:

Suscriptor: Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos (numeral 31 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994).

Usuario: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como receptor directo del servicio. A este último usuario se denomina también consumidor (numeral 31 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994).

García Horta (2010, p. 154 y 155) agrega que, evidentemente, no siempre el suscriptor resulta siendo el mismo propietario del inmueble, pues para suscribir el CCU con una empresa de servicios públicos, no se requiere ostentar dicho título, lo cual sugiere dos cosas: por un lado, que el arrendatario también puede suscribir el servicio; y por la otra, que el propietario también es usuario y por consiguiente sobre él también recae la solidaridad de las obligaciones que emanan del CCU.

Ahora bien, en principio cualquier persona, indistintamente que se trate del propietario o el arrendatario del inmueble, pueden contratar y solicitar el servicio, no obstante, de acuerdo con el artículo 134 de la Ley en 142 de 1994, esa persona debe ser capaz de contratar, es decir, ostentar aptitud legal para adquirir derechos y obligaciones, asimismo, debe demostrar que habita o utiliza de modo

permanente el inmueble, y sin importar el título, tiene derecho a recibir los servicios públicos domiciliarios, y por consiguiente hacerse parte del contrato.

Pulido Sierra (2012, p. 137), por su parte, denomina al suscriptor como la parte adherente del CCU, y aclara que además del propietario y el arrendador, el poseedor, como titular del inmueble, también puede suscribir y recibir los servicios públicos domiciliarios, en ese caso, se podría suponer que usufructuario, tenedor y ocupante de facto también podrían solicitar el servicio sin ninguna restricción.

Sin embargo, Dussán Hitscherich (p.327), se aparta del criterio general, y sostiene que no es dable que el propietario, aun cuando no reciba directamente el servicio, sea considerado usuario, y aclara que en esas circunstancias, el arrendador debe contar, por regla general con el consentimiento del propietario para conectar un nuevo servicio, tal y como lo plantea la sentencia C-493 de 1997, de la Corte Constitucional. Asimismo, este autor, aclara que es muy importante la distinción entre usuario y suscriptor, sin duda alguna, toda vez que en la práctica, algunas empresas, le dan un trato similar, sin considerar que el primero es quién se beneficia de la prestación del servicio o lo recibe de forma directa, y el segundo es con quien se ha celebrado el contrato. Situación que desde luego ha generado toda una serie de sorpresas desagradables (Dussán Hitscherich) en contra de los nuevos suscriptores, pues se ha vuelto común que les hagan responder por los pagos de consumos anteriores de otros usuarios en el mismo inmueble, situación que se subsume con la aplicación equivocada del principio de solidaridad.

En el otro lado de la balanza, se encuentra la empresa prestadora, quien es la encargada de suministrar el servicio, y puede estar a cargo, de acuerdo al artículo 15, de: empresas de servicios públicos; personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos; los municipios cuando asuman en forma directa, la prestación de estos servicios; las organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para prestar servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas; las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al momento de expedirse esta Ley estén prestando cualquiera de los servicios públicos y se ajusten a lo establecido en el parágrafo del Artículo 17.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 142 de 1994, la naturaleza de todas las empresas de servicios públicos domiciliarios deberá adoptar la forma de una sociedad por acciones, las entidades descentralizadas de cualquier orden nacional, la de una empresa industrial y comercial del estado.

CONCLUSIÓN

Los servicios públicos domiciliarios en Colombia son un conjunto de servicios públicos básicos y esenciales que prestan las personas, entidades y organizaciones a través de un sistema de redes, puntos y terminales, dirigidos a satisfacer necesidades básicas de la población general. Estos servicios se prestan bajo un marco de regulación prevenido desde la Constitución y estructurado por la Ley.

El contrato de condiciones uniformes es un instrumento de regulación contractual, mediante el cual se origina una relación de derechos y obligaciones entre las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y los usuarios que los requieren.

Este contrato, contiene una serie de disposiciones que se aplican de manera uniforme a todos los usuarios que se adhieren a él, para recibir el servicio en condiciones de equidad, calidad, continuidad, permanencia y cobertura.

Las personas prestadoras elaboran el contrato, sujetas a las disposiciones legales constitucionales y administrativas que fijan las comisiones de regulación de cada sector, asimismo, prestan los servicios para proyectar socialmente a las personas en sus requerimientos del trabajo y el hogar.

El contrato de condiciones uniformes también es un contrato que sirve de garantía en la protección de los derechos de los usuarios y en el cumplimiento de las obligaciones y deberes de las personas jurídicas que suministran estos servicios, igualmente, es una plataforma jurídica en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

Para suscribir el contrato de condiciones uniformes con una empresa de servicios públicos, no se requiere ostentar algún título en particular en relación con el inmueble, basta con que existan los elementos esenciales de validez, tales como el consentimiento, la capacidad y un objeto y una causa lícita, que exista un requerimiento por parte del usuario de recibir el servicio, y que el inmueble cumpla con las condiciones técnicas exigidas por la empresa para empezar a prestar el servicio, de esa manera se podrá dar origen a la relación de consumo entre el usuario y la empresa.

REFERENCIAS

- Dussán Hitscherich, J. (s.a.) *El régimen de los servicios públicos domiciliarios*. Bogotá. Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas.
- Colombia. Defensoría del Pueblo. *Si Hay Derecho*. Consultado el 05 de Junio de 2013. Extraído de: http://www.defensoria.org.co/red/?_item=060501&_secc=06&ts=1
- Enrique Ayala, C. (1996). *Elementos teóricos de los servicios públicos domiciliarios*. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley.
- Fernando Durango, R. (2005). *El contrato de condiciones uniformes de servicios públicos domiciliarios (teoría y práctica)*. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. LTDA.
- García Horta, R. (2010). *Los abusos en la prestación de los servicios públicos domiciliarios*. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional Ltda.
- Cárdenas Uribe J, C. (2003). *Contratos en el sector de los servicios públicos domiciliarios*. Bogotá: Universidad el Externado.
- Castro de Cifuentes M. (2009). *Derecho de las obligaciones*, Bogotá: Universidad de los Andes.
- Pulido Sierra, L. (2012). *Servicios públicos domiciliarios estudio crítico sobre el régimen legal y contractual y de los derechos de los usuarios por un nuevo contrato social de SPD*. Bogotá. Grupo editorial Ibáñez. 2012.
- Rodríguez Rodríguez, L. (2008). *Derecho administrativo general y colombiano*. Bogotá: Editorial Temis S.A.
- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. (2008). *Servicios Públicos domiciliarios. Régimen básico*. 4ª ed. Bogotá: SSPD.
- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. (2010). *Guía del usuario. Serie participación ciudadana y control social a los servicios públicos*. SSPD. 5ª ed. Bogotá: (s. ed.). 2010.
- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. *El Contrato de Condiciones Uniformes. Concepto Unificado*. SSPD-OJU-2010-12.
- Tamayo Lombana A. (2004). *Manual de obligaciones*. Teoría del acto jurídico y otras fuentes. Bogotá: Editorial Temis S.A.
- Vatia S.A. E.S.P. CCU. Consultado el 05 de julio de 2013. Extraído de la página: http://www.vatia.com.co/galeria_de_archivos/
- Electricaribe. *Contrato de prestación del servicio público de distribución Y/o comercialización de energía eléctrica*. Consultado el 05 de julio de 2013. Extraído de la página:

http://www.electricaribe.com/servlet/ficheros/1297134192474/Contrato_condiciones_uniformes,2.pdf

Empresa de Acueducto Y Alcantarillado de Bogotá E. S. P. Consultado 06 de julio de 2013. Extraído de: <http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal>

Jurisprudencia.

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia t-540 del 24 de septiembre de 1992, magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Expediente t-3126.

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia t-578 del 03 de noviembre de 1992. magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero. Expediente t-1848.

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia c-493 del 02 de octubre de 1997, magistrado ponente: Fabio Morondiaz. Expediente no. d-1625

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia c-1162 del 06 de septiembre de 2000, magistrado ponente José g. Hernández Galindo. expediente d-2863.

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia SU-1010 del 16 de octubre de 2008, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.

Legislación.

Colombia. Congreso de la República. Diario oficial del 23 de julio de 1991. Por el cual se expide el estatuto nacional de usuarios de los servicios públicos domiciliarios. Decreto 1842 de 1991.

Colombia. Congreso de la República. Diario oficial 41.433. por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 11 de julio de 1994. Ley 142 de 1994.

Colombia. Congreso de la República. Diario oficial 41.537. Por la cual se modifica parcialmente la ley 142 de 1994. 31 de agosto de 2001. Ley 689 de 2001.

Colombia. Congreso de la República. Diario oficial 47.426. por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones –tic–, se crea la agencia nacional de espectro y se dictan otras disposiciones. 30 de julio de 2009. Ley 1341 de 2009.

Colombia. Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Diario oficial 46292. Por el cual se modifica el modelo de condiciones uniformes del contrato, para la prestación del servicio público domiciliario de aseo, contenido en el anexo 9 de la resolución cra 151 de 2001 y se dictan otras disposiciones sobre el particular. 25 de mayo de 2006. Resolución 376 de 2006.